

EL PACTO FISCAL DEBE PRIORIZAR EL DESARROLLO HUMANO

Página 2-4



Págs. 8-10

Autonomías indígenas priorizan la participación

Cuatro pueblos originarios ya elaboraron cartas orgánicas.

Págs. 11-13

Los bonos soberanos suben cifras de la deuda externa

¿Para qué proyectos serán destinados estos recursos?

Págs. 15

Jubileo cumple 9 años de trabajo por la vida digna

La Fundación aporta al análisis, debate público e incidencia.

MUNICIPIOS PEQUEÑOS RECAUDAN SÓLO 11% DE SUS INGRESOS Y DEPENDEN DE TRANSFERENCIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Páginas 5-7

JUBILEO PROPONE UN PACTO FISCAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

Los resultados del censo deben constituirse en un punto de partida para proyectar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la población boliviana. Uno de los mecanismos para lograr este propósito es el Pacto Fiscal.

La población puso su mejor disposición y responsabilidad para la realización del censo, proporcionando datos e información valiosa sobre su situación de vida. Y así como cuando un ciudadano paga impuestos y espera del Estado obras y servicios públicos; del mismo modo, este comportamiento responsable en el censo se debe interpretar como las expectativas y esperanzas para recibir, a cambio, inversión y políticas públicas que respondan a demandas sociales y económicas, con particular atención en los sectores más empobrecidos.

Para este fin, queda pendiente el escenario denominado Pacto Fiscal, que es el espacio de concertación entre actores sociales, económicos y políticos que debe permitir construir un proyecto de desarrollo de país que sea sostenible en el tiempo, establecer la generación de recursos públicos (cómo los obtenemos), la distribución (qué instancias son las más adecuadas para administrarlos) y el destino (uso y finalidad) de esos recursos.

De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, este proceso deberá desarrollarse después de conocidos los resultados oficiales del Censo 2012.

En este espacio se deberán lograr soluciones de consenso a expectativas de carácter estructural, velando por la legitimidad, lo que implica que ese proceso sea participativo, representativo e incluyente; y que parta



de lo local, pasando por lo regional-departamental, hasta la instancia nacional; aspectos fundamentales que permitirían garantizar acuerdos y compromisos concertados, como fruto de un diálogo con todos los sectores.

Si bien Bolivia atravesó por un proceso Constituyente con la definición de competencias para los diferentes niveles de gobierno y con un nuevo diseño de Estado con autonomía para los gobiernos subnacionales, el tema de la generación y distribución de los recursos públicos no ha sido tratado. El sistema impositivo es de los años 80 y la distribución de los recursos públicos de los 90 (en el caso de hidrocarburos del año 2005).

En el Pacto Fiscal se podrán resolver diferentes problemas respecto al ordenamiento fiscal, como la baja cobertura tributaria, desequilibrios en la distribución de recursos, saldos sin ejecutar y endeudamiento público, entre otros.

El país todavía tiene un marco de oportunidades; por ahora son importantes los recursos que se captan de sectores extractivos, como hidrocarburos y minería; pero es responsabilidad de todos construir un desarrollo humano integral que sea sostenible en el tiempo, que garantice

una vida digna y plena para las generaciones presentes y futuras.

El censo ha sido realizado y queda esperar los resultados que permitirán, por un lado, actualizar los porcentajes de co-participación de los impuestos que son distribuidos de acuerdo a la población y, por otro lado, encarar el Pacto Fiscal que es una tarea pendiente del proceso Constituyente, posiblemente la más importante para encaminar al país hacia un verdadero desarrollo.

El Pacto Fiscal es una necesidad, sin embargo, una amenaza es que tenga una mirada simplista si se enfoca sólo a una redistribución de recursos sin ingresar a un análisis estructural que lleve a resolver los grandes retos pendientes en el país.

Otra amenaza es la proximidad de un periodo preelectoral con miras al 2014, que politizará el proceso, y así se perdería una oportunidad histórica para la concertación de políticas que conduzcan a un mejor futuro. El diálogo y la capacidad de conversar entre diferentes no debería ser entendido como una debilidad o falta de autoridad, sino como un aporte al fortalecimiento democrático; por tanto, un Pacto Fiscal requiere de voluntad política, con decisiones que prioricen el bien común.

EL CENSO PUEDE AYUDAR A PROYECTAR EL DESARROLLO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Con base en la información obtenida en el censo, el país podría replantear las políticas de desarrollo y asumir ajustes a los planes de reducción de la pobreza para que los resultados sean más efectivos y sostenibles.

Con la información colectada es posible saber cuál es la oferta de mano de obra, qué potencialidades tiene el país en diversos sectores productivos, de qué edades son y dónde están los trabajadores, qué necesidades hay en la población por regiones, con qué vocaciones productivas y cómo pueden articularse los mercados internos y las potencialidades para satisfacer las demandas, entre otros aspectos.

Se podrán evaluar resultados de políticas anteriores aplicadas en torno a salud, educación, empleo, vivienda, urbanización, ordenamiento territorial, servicios de transporte, energía eléctrica, agua, gas, medio ambiente y otros temas de los que depende la calidad de vida de los habitantes.

También es la oportunidad para la redefinición de prioridades de inversión desde los diversos niveles de gobierno.

Además, los gobiernos subnacionales deben estar preparados para usar los resultados censales, para una mejor toma de decisiones respecto a zonas y actividades para la producción.

Tras el Censo, se están generando conflictos por intereses políticos, principalmente por la reasignación de escaños parlamentarios, además de controversias locales y regionales por territorios y jurisdicciones; pero el tratamiento de esos temas no deberían estar por encima de un propósito mayor, como son las

políticas, planes y proyectos que contribuyan al desarrollo humano integral.

Tareas inmediatas

En el censo realizado el 21 de noviembre surgieron cuestionamientos respecto a posibles errores de omisión, provenientes de problemas de cobertura, logísticos y otros, por lo que conveniría una evaluación técnica.

Como suele ocurrir en procesos censales, es recomendable realizar una encuesta de cobertura o post empadronamiento, además de un análisis de consistencia de los datos del propio censo, complementado con información de anteriores censos y otras fuentes (registros administrativos y encuestas); con la finalidad de no poner en duda la confiabilidad de los datos obtenidos en este proceso.

La transparencia es un punto clave para la generación de confianza y del futuro comportamiento de la población respecto a futuras investigaciones estadísticas.

Censo como herramienta

Durante el anterior periodo intercensal (2001-2012) no hubo un proyecto que permita mejorar y ofrecer mayor información estadística utilizando fuentes alternativas, como las encuestas y los registros administrativos.

A partir del actual marco de muestreo, se debe implementar un sistema integrado de encuestas a hogares, para llenar los vacíos de información estadística durante los próximos años.

El marco cartográfico actualizado con fines estadísticos debe ser permanentemente alimentado y, de esta forma, publicar un nuevo Sistema de Información Georreferenciado y Digitalizado.

La Ruta del Censo propone una ley para las estadísticas

Hace 36 años, en 1976, un gobierno de facto puso en vigencia un decreto-ley que hasta hoy regula el Sistema Nacional de Información Estadística, norma que ya está desactualizada.

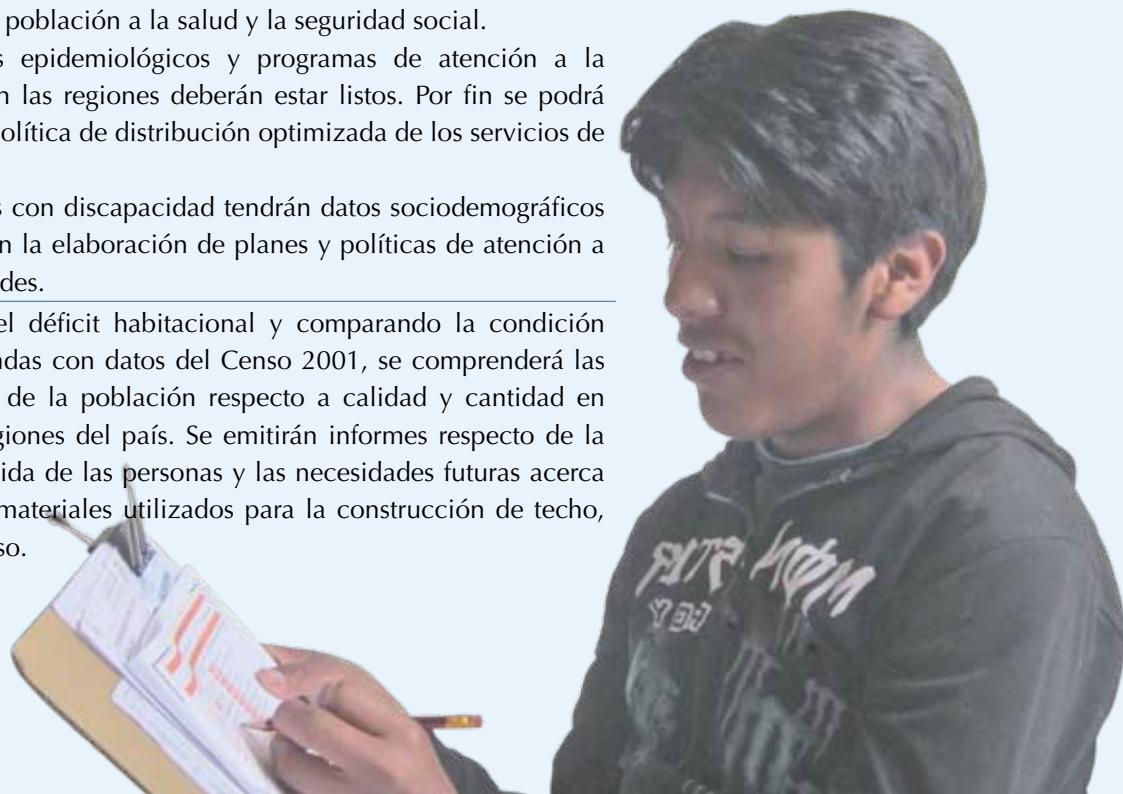
La red de instituciones "La ruta del censo 2012, en la que participa Fundación Jubileo, elaboró una propuesta de Ley General del Sistema de Información Estadística de Bolivia, que propone un manejo integral de las estadísticas del país, bajo los principios de accesibilidad, calidad, transparencia, oportunidad, confidencialidad, entre otros.

La ley fortalecerá y garantizará la institucionalidad, independencia, autonomía y sostenibilidad del órgano rector el INE, mediante la gestión de sus recursos humanos y presupuestarios.

La ley promoverá y reconocerá, las competencias en materia estadística del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, para que las estadísticas cumplan su propósito de servir de base para la toma de decisiones en los niveles nacionales, subnacionales y sectoriales.

Esta iniciativa de la sociedad civil será puesta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que también sirva a un futuro Pacto Fiscal, permitiendo contar con un sistema de información de calidad para una mejor planificación del desarrollo.

Información del Censo	Usos potenciales
Edad y sexo	<ul style="list-style-type: none"> • Con la composición y evolución de la estructura demográfica de todas las regiones se podrán definir políticas para la población en edad de trabajar, en edad reproductiva, en edad escolar, en edades avanzadas, etc. • Las nuevas proyecciones de población servirán para ayudar a identificar los segmentos de la población que requieren diferentes tipos de servicios en la próxima década. • La nueva base de datos sobre las diversas desigualdades y brechas de género mostrarán los cambios en los hogares bolivianos respecto de los roles de mujeres y hombres, esto debe traducirse en políticas para mejorar el mercado laboral y valorar los trabajos que se realizan dentro del hogar.
Estado civil y familia	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de protección de la familia, al disponer de información respecto a la formación de las familias y la composición del hogar.
Nivel de educación y alfabetización	<ul style="list-style-type: none"> • Los sectores públicos y privados tienen información para diseñar políticas que mejoren el nivel de instrucción y las diferencias existentes sobre las oportunidades de educación entre hombres y mujeres, grupos de edad, así como entre zonas urbanas y rurales. También para cubrir las necesidades presentes y futuras de recursos humanos calificados. • El estado plurinacional tiene una formidable ayuda, para seleccionar las mejores estrategias de comunicarse con los residentes de cada región y, de este modo, se pueda planificar la mejor prestación de servicios en el sistema de enseñanza de acuerdo con las necesidades de la población y la edad de los niños.
Lugar de residencia actual y anterior	<ul style="list-style-type: none"> • Al tener datos sobre los cambios en las zonas rurales y urbanas respecto de los lugares de residencia previa, ayuda a identificar las comunidades que están experimentando la emigración. A partir de esto se podrá asumir acciones respecto a los movimientos migratorios al interior del país, así como el impacto de la emigración internacional en cada región.
La ocupación y condición de empleo	<ul style="list-style-type: none"> • Se deben elaborar proyecciones de empleo y características del desempleo, además de realizar estudios del sector informal. • Estas respuestas ayudarán a los distintos gobiernos subnacionales a tener una idea de su fuerza de trabajo respecto de la magnitud, competencias educativas de la fuerza de trabajo y otras características regionalizadas; por tanto, será vital para desarrollar estrategias de desarrollo económico. • Los niveles de calificación de la fuerza de trabajo definirán políticas para la producción y distribución de bienes y servicios en todas las regiones.
Salud	<ul style="list-style-type: none"> • La cumbre de salud se desarrollará después del censo, entonces se espera el cambio en la política de salud referida especialmente al acceso de la población a la salud y la seguridad social. • Los estudios epidemiológicos y programas de atención a la población en las regiones deberán estar listos. Por fin se podrá concluir la política de distribución optimizada de los servicios de salud. • Las personas con discapacidad tendrán datos sociodemográficos que sirvan en la elaboración de planes y políticas de atención a sus necesidades.
Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar el déficit habitacional y comparando la condición de las viviendas con datos del Censo 2001, se comprenderá las necesidades de la población respecto a calidad y cantidad en todas las regiones del país. Se emitirán informes respecto de la calidad de vida de las personas y las necesidades futuras acerca del tipo de materiales utilizados para la construcción de techo, paredes y piso.



LOS MUNICIPIOS NO GENERAN SUS PROPIOS RECURSOS Y DEPENDEN DE TRANSFERENCIAS

La mayoría de los municipios del país depende, en gran medida, de los recursos por transferencias de impuestos recaudados por el nivel central. En el caso de los municipios pequeños, solamente el 11% de sus recursos son generados por sus propias contribuciones.

Esta situación refleja la gran dependencia que tiene el nivel municipal y el poco esfuerzo contributivo, a pesar de su condición de autonomía, en especial de los municipios pequeños.

El presupuesto de los municipios del país cuenta con diferentes fuentes de financiamiento, como las provenientes de coparticipación de impuestos, recursos propios y otros.

El cuadro permite observar que solamente el 27% de los ingresos de los municipios del país corresponde a ingresos recaudados por los gobiernos municipales; la gran mayoría proviene de las Transferencias del Nivel Central por participación de tributos y también de otras transferencias y donaciones.

Para analizar el nivel de dependencia se han dividido los ingresos en dos grupos:

Por un lado están los recursos que recaudan o generan los municipios, entre los cuales se encuentra:

- Los impuestos municipales a la propiedad y transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores
- El 15% de la regalía minera correspondiente a lo producido en el municipio
- Y otros recursos propios donde se encuentran las tasas, patentes, venta de bienes y servicios, etc.

Por otro lado están los ingresos que reciben los municipios por transferencias de recursos recaudados por otras instancias:

- Transferencias del Nivel Central por participación de tributos, que corresponde a la coparticipación de impuestos nacionales, Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, impuesto al juego y los recursos provenientes del Diálogo 2000.
- Transferencias de los diferentes niveles de gobierno hacia los municipios por diferentes conceptos como ser apoyo presupuestario y contraparte para proyectos.
- Donaciones.

Esta situación responde, en cierta medida, al sistema tributario y su distribución, bajo el cual la mayoría de los impuestos son recaudados por el Nivel Central y distribuidos mediante el sistema de coparticipación; sin embargo, los gobiernos municipales tienen potestad

de recaudar los impuestos municipales y otros recursos propios; pero al observar y comparar el desempeño de los diferentes municipios se constata que existe un comportamiento distinto de acuerdo al tamaño o condición de los municipios; lo que nos permite

Composición de los ingresos de acuerdo con su aporte en el presupuesto total.

Ingresos municipales 2012 (datos del presupuesto)

Todos los municipios del país

	En bolivianos		En bolivianos		
Ingresos por Impuestos	1,876,940,112	}	3,029,292,421	27%	Ingresos Recaudados o generados por/en el Municipio
Regalías Mineras	134,778,187				
Otros Recursos Propios	1,017,574,122				
Transferencias del TGN por participación de impuestos, y otras transferencias	8,044,029,269		8,084,379,786	73%	Transferencias y Donaciones
Donaciones	40,350,517				
TOTAL	11,113,672,207			100%	

FUENTE: Elaboración propia con base en el Presupuesto General del Estado

* No se incluyen los recursos de crédito, saldos en caja y bancos, y la disminución de otros activos financieros.

Si bien la Constitución Política del Estado (2009), en el marco de la autonomía, establece que los gobiernos subnacionales podrán crear impuestos, la Ley de Clasificación y Creación de Impuestos (2011) determina que la gran mayoría de los posibles impuestos son de dominio privativo del nivel central y no deja mayor espacio a los gobiernos subnacionales para la creación de impuestos que puedan ser relevantes.

Esta ley determina como dominio municipal los impuestos a la propiedad y transferencia de bienes inmuebles y vehículos, y el impuesto al consumo de chicha; los cuales ya eran atribución del nivel municipal, siendo la única novedad la posibilidad de crear un impuesto a la afectación del medio ambiente provocada por vehículos automotores que, al parecer, sería de complicada implementación, especialmente en municipios pequeños.

Ingresos municipales 2012 (datos del presupuesto) Sólo municipios capitales de departamento y otros municipios grandes

	En bolivianos	En bolivianos			
Ingresos por Impuestos	1,666,326,090	}	2,501,924,461	40%	Ingresos Recaudados o generados por/en el Municipio
Regalías Mineras	38,200,000				
Otros Recursos Propios	797,398,371				
Transferencias del TGN por participación de impuestos, y otras transferencias	3,737,911,726	}	3,762,562,049	60%	Transferencias y Donaciones
Donaciones	24,650,323				
TOTAL	6,264,486,510			100%	

FUENTE: Elaboración propia con base en el Presupuesto General del Estado.

* No se incluyen los recursos de crédito, saldos en caja y bancos, ni la disminución de otros activos financieros.

Ingresos municipales 2012 (datos del presupuesto) Sólo municipios pequeños / con menos de 100.000 habitantes

	En bolivianos	En bolivianos			
Ingresos por Impuestos	210,614,022	}	527,367,960	11%	Ingresos Recaudados o generados por/en el Municipio
Regalías Mineras	96,578,187				
Otros Recursos Propios	220,175,751				
Transferencias del TGN por participación de impuestos, y otras transferencias	4,306,117,543	}	4,321,817,737	89%	Transferencias y Donaciones
Donaciones	15,700,194				
TOTAL	4,849,185,697			100%	

FUENTE: Elaboración propia con base en el Presupuesto General del Estado

* No se incluyen los recursos de crédito, saldos en caja y bancos, y la disminución de otros activos financieros.

acercarnos a otras conclusiones con relación a la dependencia y el esfuerzo contributivo.

Para analizar con mayor detalle se ha dividido en dos grupos, el primero corresponde a los 9 municipios capitales de departamento y otros municipios grandes con población igual o mayor a 100 mil habitantes, como El Alto, Quillacollo, Sacaba, Yacuiba, Montero y Riberalta; el segundo grupo corresponde al resto de los municipios de Bolivia.

En el caso de los municipios de capitales de departamento y otros grandes, la dependencia de las transferencias y donaciones no es tan grande como en el caso del total de municipios de Bolivia, estos municipios generan, en promedio, el 40% de sus recursos. Incluso los municipios de Santa Cruz y La Paz recaudan un poco más de 50% de sus ingresos.

En el caso de los demás municipios de Bolivia, es decir los municipios pequeños, éstos muestran una

dependencia bastante alta de los recursos provenientes de transferencias del nivel central por participación de impuestos y otros. Sólo generan el 11% de los recursos que gastan.

La diferencia entre la dependencia de los municipios más grandes y los municipios pequeños refleja el poco esfuerzo contributivo que se realiza en los municipios más pequeños.

Como se observa en el cuadro, del total de los recursos recaudados por el nivel municipal, el 83% es recaudado por 15

Ingresos municipales 2012 (datos del presupuesto)

	Ingresos Recaudados o generados por/en el Municipio		Transferencias y Donaciones		TOTAL Ingresos Municipales		"Población (proy. 2010 INE)"	
	En Bs.	%	En Bs.	%	En Bs.	%	habitantes	%
Municipios pequeños	527.367.960	17%	4.321.817.737	53%	4.849.185.697	44%	4.636.128	44%
Municipios Grandes	2.501.924.461	83%	3.762.562.049	47%	6.264.486.511	56%	5.790.027	56%
TOTAL	3.029.292.421	100%	8.084.379.786	100%	11.113.672.208	100%	10.426.155	100%

FUENTE: Elaboración propia en base al Presupuesto General del Estado

* No se incluyen los recursos de crédito, Saldos en caja y bancos, y la disminución de otros activos financieros.

municipios, entre los que se encuentran las capitales de departamento y otros municipios grandes. El resto, más de 300 municipios, sólo recauda el 17% del total.

En cambio, los 15 municipios grandes reciben el 47% de las transferencias del nivel central y otras, mientras que los más de 300 municipios reciben el 53% de las transferencias y otros.

Del total de ingresos municipales, 44% corresponde a los municipios pequeños y 56% a los municipios grandes. Coincidentemente, 44% de la población se encuentra en los municipios pequeños y 56% en los 15 municipios grandes.

Considerando los dos grupos de municipios analizados, esta situación revela que los municipios del país estarían recibiendo una cantidad similar de recursos por habitante; sin embargo, el esfuerzo tributario de unos es mínimo y son altamente subvencionados, mientras que los que realizan un mayor esfuerzo por recaudar reciben menores transferencias.

Si el comportamiento en la recaudación de los impuestos nacionales es similar, se puede aseverar que la gran mayoría de los municipios del país están siendo subvencionados con recursos recaudados y generados en otras regiones (incluso por renta extractiva como el IDH) y son altamente dependientes.

De acuerdo con la ley, la autonomía se ejerce a través de la potestad



de crear, recaudar y/o administrar tributos e implica ejercer las facultades para generar y ampliar los recursos económicos y financieros. Sin embargo, por los datos presentados, los gobiernos municipales no estarían ejerciendo plenamente su autonomía.

Estos datos también revelan la falta de corresponsabilidad de los municipios en la generación de recursos para atender a la población y también sugiere un alto grado de informalidad en la economía de la mayoría de los municipios del país.

En este sentido, es importante que los diferentes municipios del país mejoren su esfuerzo contributivo para reducir la dependencia de las transferencias de recursos y avanzar en su autonomía y, por otro lado, es necesario evaluar la estructura del sistema tributario en sentido de incorporar un sentido de corresponsabilidad que deberían asumir los gobiernos subnacionales y sus habitantes en relación a los recursos generados para la provisión de bienes y servicios.

AUTONOMÍAS INDÍGENAS PROMUEVEN CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA

Cinco de 11 municipios que deben definir cómo ejercer su Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) ya elaboraron sus proyectos de Estatuto Autonómico, los que, entre algunas características, promueven la participación colectiva para el control social.

En estos municipios se anteponen sus normas y procedimientos propios para la elección de sus representantes ante todas las instancias, lo que implica dejar de lado a los partidos políticos y practicar la democracia directa y comunitaria.

Bolivia cuenta con 337 municipios, de los cuales 11 accedieron a la Autonomía Indígena Originaria Campesina (IOC) a través del referéndum del 2009. A tres años de ese proceso, los cinco municipios que elaboraron sus proyectos de Estatutos Autonómicos son: Chipaya, Totora y Pampa Aullagas, en el departamento de Oruro; Mojocoya, en Chuquisaca; y Charagua, en Santa Cruz.

Estos proyectos autonómicos están actualmente sometidos a revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Algunas características de estos municipios es que tienen pocos habitantes, la mayoría de ellos en situación de pobreza y pobreza extrema, además de un elevado porcentaje de gasto corriente, usando recursos que se generan fuera de su jurisdicción.

El artículo 2 de la Constitución reconoce la “libre determinación de las naciones y pueblos indígenas (...) derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus

entidades territoriales”. Una de estas entidades territoriales, según señala la carta constitucional y la Ley Marco de Autonomías es la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

Participación y Control Social

La participación y el control social son prácticas ya presentes en las organizaciones sociales y en los municipios rurales IOC; sin embargo, a partir de los años 90, se ha intentado institucionalizarlos con diferentes denominaciones (como Comité de Vigilancia, Junta Escolar, Organización Territorial de Base y otros), con la pretensión de separar los roles de las organizaciones sociales respecto a los roles de los funcionarios públicos.

Desde el enfoque de las organizaciones indígenas originarias campesinas existe una cultura política que hace del control social una práctica colectiva. Así, por ejemplo, aún sin que existan normas jurídicas, son habituales las asambleas en las que autoridades originarias, alcaldes, concejales, servidores públicos e incluso el Comité de Vigilancia planifican, informan y rinden cuentas de su gestión.

En la elaboración de los estatutos autonómicos también se ha debatido si se debe apropiar a las organizaciones y prácticas indígenas, originarias, campesinas un modelo de gestión municipal, resultado del proceso de la Ley de Participación Popular, Ley de Municipales y otras afines. Una realidad que se dio en los municipios, en especial rurales, fue la subordinación del Comité de Vigilancia a la organización y autoridades IOC.

En las cinco propuestas se marca un aspecto central que podría revolucionar la participación política en el país, es la propuesta de cambiar del sistema de partidos para la elección de autoridades por el uso de normas y procedimientos propios, cuya característica principal es la denominada democracia directa y comunitaria; es decir, la elección según la práctica actual y cultura política de las organizaciones IOC.

Así se realiza una interesante combinación entre estas forma de elección de autoridades (según normas y procedimientos propios) ajustando la misma a una estructura de gobierno compuesta por el Legislativo y Ejecutivo, pero subordinadas a la máxima instancia de decisión, cual es el colectivo o la asamblea, donde también se incluyen elementos como la equidad de género y la revocatoria de mandato.

Este enfoque influye sobre el planteamiento de la participación y control social, el mismo que se deja a la máxima instancia de decisión, la asamblea (jacha mara tantachawi, Chawkh Parla, Jacha tantachawi, Asamblea Autonómica) como la responsable del ejercicio del control social en la autonomía indígena, originaria, campesina. De la misma forma, estas instancias colectivas funcionan en los ámbitos comunal y zonal.

Gestión Pública

Este tema de la gestión pública parece ser uno de los mayores desafíos en la elaboración de los Estatutos Autonómicos, pues muy débilmente se han hecho planteamientos para la parte operativa de la participación y control social. En una propuesta (Charagua) se hace mención a las medidas

anticorrupción y en otra (Mojocoya) se delega a cinco autoridades que surjan de una elección por normas y procedimientos propios para que ejerzan el rol del control social (similar al comité de vigilancia).

Luego del planteamiento de los espacios colectivos o asambleas para el ejercicio del control social, se hace poca mención a los procesos que conectan el control social con los sistemas y normativa del control gubernamental.

La Ley Marco de Autonomías menciona la vigencia transitoria de los Comités de Vigilancia hasta que exista norma que lo sustituya. El Estatuto Autonómico vendría a ser esa norma, pero por los planteamientos revisados dejaría de ser una instancia formal y pasaría a depender de la asamblea, lo cual rompe con el conocido modelo de gestión municipal heredado por la Ley de Participación Popular.

Un gran desafío para los municipios con AIOC es el cumplimiento de los artículos 241 y 242 de la Constitución, donde el tema de la participación y control social supera el ámbito de la gestión municipal e incursiona, por ejemplo, en temas de servicios

públicos y calidad de vida, derechos humanos, políticas públicas, energía, recursos naturales y otros. Si estos asuntos no están contenidos en sus Estatutos Autonómicos, podrían ser las posteriores leyes autonómicas las que tengan que construir este modelo de gestión pública para los municipios indígenas, originarios, campesinos.

La representación

Un aporte de los Estatutos Autonómicos de las AIOC es que ya no existirá una especie de “paralelismo” entre los roles y las organizaciones dedicadas al control social, como pasó en su momento entre el Comité de Vigilancia y las organizaciones sociales. De esa forma, la representación sigue el curso de las normas y procedimientos propios de las organizaciones IOC.

Muy débilmente, uno de los estatutos menciona la inclusión de otros actores no indígenas, originario, campesinos, como por ejemplo los vecinos de los pueblos. De acuerdo con la Constitución, rige el principio de la inclusión, lo que implicaría que, en estos municipios, no debe marginarse a otros pobladores, como comerciantes, migrantes y otros con los que conviven en el territorio municipal.

Una interrogante es que al primar las decisiones de asamblea — considerando la posibilidad de una equivocación o error colectivo—, en caso de determinar responsabilidades sobre el uso de recursos estatales, resultaría difícil aplicar el sistema de control gubernamental y de lucha contra la corrupción.

Aún más complejo es el tema de la participación de la sociedad civil organizada, como menciona la CPE (art. 241 y 242), que al ejercer el control social tiene la finalidad de que mejore el desarrollo y la calidad de vida en el municipio; pero en el diseño de los estatutos analizados se advierte que a la sociedad civil se la hace parte de la estructura y representación del gobierno autónomo, originario, campesino.

Otro tema que se verá en la implementación, una vez aprobados los Estatutos Autonómicos de los municipios IOC, es su viabilidad y sostenibilidad, ya que al mantener el espacio territorial de los municipios arrastrarán las debilidades de gestión, con pocos recursos, lo que pondrá a prueba como un autogobierno AIOC puede mejorar las condiciones de vida.

Propuestas sobre participación y control social en proyectos estatutos autonómicos de autonomía indígena

Gobierno Autónomo Originario de Totorá Awki Marka	Autonomía de la Nación Originaria Uru Chipaya	Autonomía Indígena Originaria Campesina de la Marka Pampa Aullagas	Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya	Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
Las autoridades originarias asumen la representación y control social en la planificación y gestión del gobierno autónomo. Estas decisiones serán permanentemente informadas y analizadas en jacha tantacahwi*	Son ejercidas por todos y todas las Manakas y Ephnakas** en la planificación, seguimiento y gestión del gobierno autónomo. El primer nivel conformado por autoridades originarias (...). El segundo nivel conformado por autoridades originarias de ayllus (...) en el Chawh Parla.	El control social ejerce el soberano (comunidades y ayllus) a través de sus organizaciones naturales de la marka. El Jacha Tantachawi es la instancia mayor de control social.	El control social se ejerce a través de sus organizaciones comunales en tres niveles: a) Jatun Tantaikuy (magno congreso); b) el magno ampliado y c) todas las instancias orgánicas (asambleas comunales y organizaciones sociales). El control social está conformado por 5 personas, representantes de zonas y centros poblados.	El estatuto establece criterios de anticorrupción para autoridades electas o designadas. No existe capítulo específico sobre participación y control social. Este tema es transversal para todas las actividades de planificación y gestión.

*Jacha Tantachawi es el magno cabildo, congreso o la reunión más importante.

** Manakas y Ephnakas, son autoridades de control y disciplina

MUNICIPIOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPELINOS

De los cinco municipios sujetos a análisis, cuatro están ubicados en el occidente del país, es decir que tienen características andinas de sus organizaciones uru chipaya, aymara o quechua; sólo la experiencia de Charagua tiene una matriz diferente de sus normas y procedimientos propios, así como de sus instituciones y organización como nación y pueblo indígena guaraní.

Características socioeconómicas y culturales:

- Según cantidad de población, Chipaya es un municipio categoría A (menor a 5.000 habitantes), Totorá, Pampa Aullagas y Mojocoya son municipios categoría B (menor a 15.000 habitantes) y Charagua es municipio categoría C (menor a 50.000 habitantes), será un hecho muy poco probable e histórico que un municipio categoría D (mayor a 50.000 habitantes), considere ser AIOC, como por ejemplo Achacachi, que tiene más de 70.000 habitantes.
- Un aspecto común en estos cinco municipios son sus altos índices de pobreza, muy por encima del promedio nacional (50,6%), en 4 municipios por encima del 96% de pobreza y con pobreza extrema encima del 80% de la población. Es decir que se plantea un aspecto central de reflexión que tiene que ver con las proyecciones reales de mejorar las condiciones de vida de la población, donde resta saber si un Estatuto Autonómico y un autogobierno AIOC coadyuvará a resolver esta situación estructural.

MUNICIPIO DE CHIPAYA		
Ubicación	Provincia Atahualpa, Departamento de Oruro	
Población	Censo 2001: 1.814 hab Proy 2011: 2.871 hab.	
Principal Idioma en el que aprendió a hablar	Otro Nativo 95.09%, Español 3.7%	
Principal pueblo indígena de autoidentificación	Originario otro nativo 94.96%	
Pobreza	99.28%	
Pobreza Extrema	87.6%	
Recursos Públicos año 2012	3,194,076 Bs.	
Planificación del Gasto POA 2012	Tipo de Gasto	%
	Funcionamiento y otros Gastos	68%
	Inversión	32%
	TOTAL	100%

MUNICIPIO DE PAMPA AULLAGAS		
Ubicación	Provincia Ladislao Cabrera, Departamento de Oruro	
Población	Censo 2001: 2.975 hab Proy 2011: 5.335 hab.	
Principal Idioma en el que aprendió a hablar	Aymara 66.76% Español 30.67%	
Principal pueblo indígena de autoidentificación	Originario aymara 95.96%	
Pobreza	97.09%	
Pobreza Extrema	82.8%	
Recursos Públicos año 2012	4,036,502 Bs.	
Planificación del Gasto POA 2012	Tipo de Gasto	%
	Funcionamiento y otros Gastos ²	57%
	Inversión	43%
	TOTAL	100%

MUNICIPIO DE TOTORA		
Ubicación	Provincia San Pedro de Totora, Departamento de Oruro	
Población	Censo 2001: 4.941 hab Proy 2011: 5.9420 hab.	
Principal Idioma en el que aprendió a hablar	Aymara 88.19% Español 11.12%	
Principal pueblo indígena de autoidentificación	Originario aymara 96.42%	
Pobreza	99.43%	
Pobreza Extrema	86.4%	
Recursos Públicos año 2012	9,362,197 Bs.	
Planificación del Gasto POA 2012	Tipo de Gasto	%
	Funcionamiento y otros Gastos	54%
	Inversión	46%
	TOTAL	100%

MUNICIPIO DE MOJOCOYA		
Ubicación	Provincia Zudáñez, Departamento de Chuquisaca	
Población	Censo 2001: 7.926 hab Proy 2011: 8330 hab.	
Principal Idioma en el que aprendió a hablar	Quechua 88.9% Español 11.47%	
Principal pueblo indígena de autoidentificación	Originario quechua 93.82%	
Pobreza	92.29%	
Pobreza Extrema	87.6%	
Recursos Públicos año 2012	10,004,014 Bs.	
Planificación del Gasto POA 2012	Tipo de Gasto	%
	Funcionamiento y otros Gastos ²	78%
	Inversión	22%
	TOTAL	100%

MUNICIPIO DE CHARAGUA		
Ubicación	Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz	
Población	Censo 2001: 24.427 hab Proy 2011: 28.219 hab.	
Principal Idioma en el que aprendió a hablar	Español 42.68% Guaraní 35.02% Extranjero 19.70%	
Principal pueblo indígena de autoidentificación	Originario guaraní 60.10% Ninguno 32.98%	
Pobreza	82.86%	
Pobreza Extrema	69.4%	
Recursos Públicos año 2012	10,004,014 Bs.	
Planificación del Gasto POA 2012	Tipo de Gasto	%
	Funcionamiento y otros Gastos ²	99%
	Inversión	1%
	TOTAL	100%



BONOS SOBERANOS POR \$US 500 MILLONES AUMENTAN CIFRAS DE LA DEUDA EXTERNA

Los 500 millones de dólares obtenidos como deuda externa, a través de la emisión de bonos en el mercado internacional, no requieren establecer de forma previa el destino y uso de estos recursos, como ocurre con otros créditos externos multilaterales o bilaterales, que sí tienen un destino específico.

Sin embargo, antes de realizar esta emisión el país debería contar con la precisión de los proyectos que se financiarán, respondiendo a criterios de planificación y necesidades de financiamiento concretas; dando además el espacio de participación a la sociedad civil para ejercer un control social al uso de estos recursos. La pregunta es a qué estrategia de endeudamiento o plan de endeudamiento responde esta emisión.

Cuando se aprobó el Presupuesto General del Estado 2012 se autorizó la emisión de estos títulos en el mercado financiero internacional por un monto de hasta 500 millones de dólares para apoyo presupuestario (Ley No 2011 del 23 de diciembre de 2011); es decir, no se aprobó un destino específico en su aprobación.

No obstante este financiamiento no tiene las criticadas condicionalidades tradicionales, como por ejemplo favorecer a sectores vinculados al propio acreedor, o la contratación obligatoria de bienes y servicios del país que hacía el préstamo; el riesgo es que al no existir de inicio un proyecto o programa específico para este financiamiento, simplemente podría ser destinado a cualquier tipo de gasto.

El endeudamiento sigue siendo una fuente de financiamiento para Bolivia,

aunque en menor proporción. En los últimos cinco años, la deuda externa financió —en promedio— el 25% de la inversión pública del país y los recursos internos el 68%, a diferencia del año 2005 en el que la deuda externa financió el 50% y los recursos internos 37%.

Si a partir del incremento de los ingresos propios se ha registrado superávit desde el 2006, ¿por qué se sigue endeudando al país? Una de las razones responde a la desigualdad en la distribución de los recursos, que ocasiona que algunos niveles de gobierno, como el TGN (nivel central), no tengan recursos suficientes y deban contratar deuda.

Pero, contradictoriamente, se tiene al resto del sector público (que abarca a municipalidades, gobernaciones, universidades, instituciones de seguridad social, e instituciones descentralizadas) que finalizan sus gestiones con grandes saldos en cuentas bancarias.

El 2011, los saldos sin ejecutar llegaron a casi 19.000 millones de bolivianos,

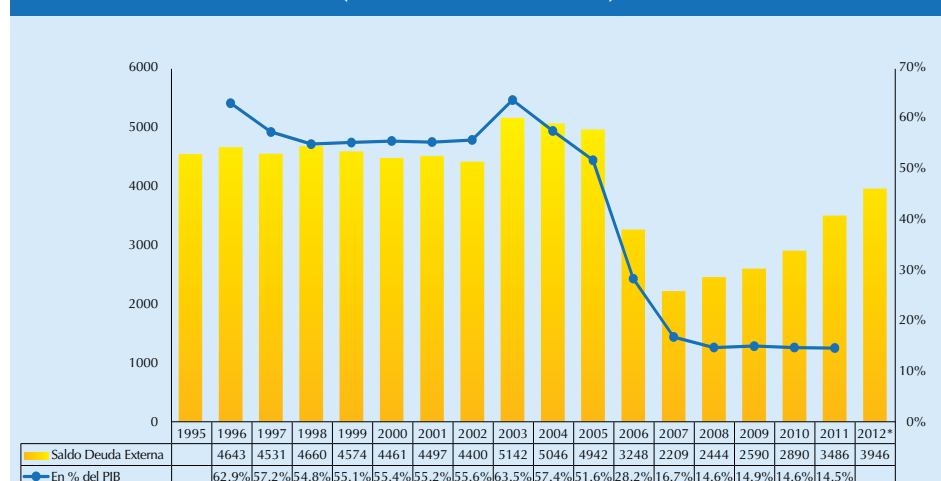
equivalentes aproximadamente a 3.000 millones de dólares, monto cercano al saldo de deuda externa que el mismo año llegó a 3.486 millones de dólares.

Aunque por un lado se dice que Bolivia no requiere recursos y está emitiendo bonos sólo para volver a formar parte de los mercados internacionales y atraer inversiones, se conoce también, a través de declaraciones del Ministro de Economía, que el Plan Nacional de Desarrollo requiere un financiamiento de 32.000 millones de dólares. Adicionalmente, el TGN puede tener necesidades de financiamiento, ya que ha cerrado su presupuesto con déficit (más gastos que ingresos) en la gestión pasada, previendo un mayor déficit el 2012 y situación similar en el proyecto de presupuesto 2013.

13% de nueva deuda

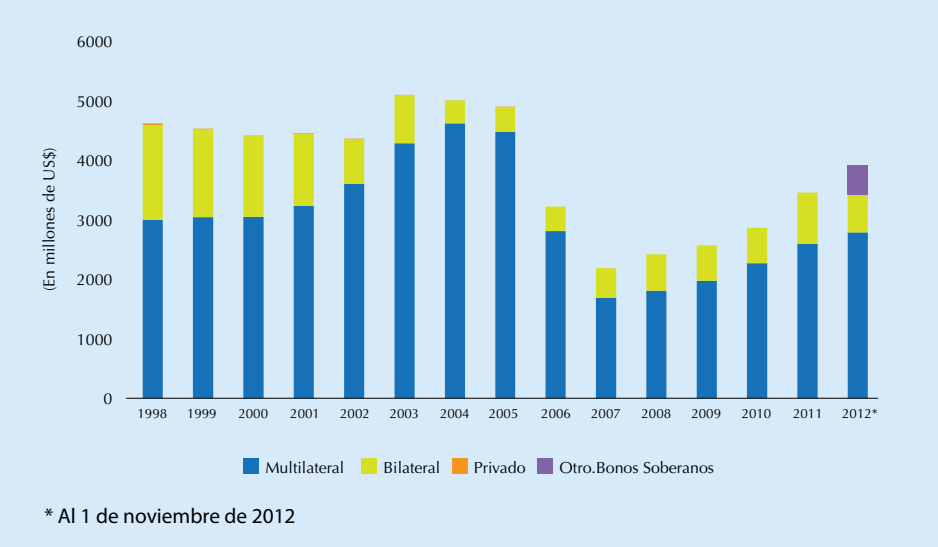
La dependencia del financiamiento externo se redujo en términos de porcentaje respecto a los recursos internos del país, los cuales crecieron significativamente por la exportación de materias primas provenientes del sector extracti-

Deuda Pública Externa Total
(en millones de dólares)



* Al 1 de noviembre de 2012

Composición del Saldo de la Deuda Pública Externa



vo; sin embargo, la deuda externa sigue creciendo en términos nominales, aumentó de 2.209 millones de dólares, el año 2007, a 3.946 millones de dólares a noviembre de 2012, y se calcula que existe un saldo cercano a 3.300 millones de dólares por desembolsar.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (5,17% el 2011) también ha influido para reflejar una menor deuda externa en porcentaje del PIB, que se habría reducido de un nivel superior a 50% antes del 2005 a 15% el 2011.

Después de la emisión de los bonos soberanos, éstos representan en la actualidad casi el 13% de la deuda externa. La deuda bilateral representa 16% (principalmente con Venezuela y China) y la deuda multilateral 71% (principalmente CAF, BID y Banco Mundial).

Esta emisión de bonos soberanos bolivianos muestra que los compradores

confían en que recibirán el pago de esta deuda; un cambio significativo en la situación del país, considerando que era clasificado como pobre y altamente endeudado, y fue sujeto de condonaciones de deuda, siendo la última el 2007.

Por otro lado, la gran demanda de estos bonos, con una tasa de interés de 4,875% -evaluada como favorable para emisiones de esta categoría de bonos en la región de América Latina-, además de mostrar los indicadores económicos favorables que hoy tiene el país gracias al sector extractivo y sus precios, muestra también la disponibilidad actual de recursos en los mercados internacionales, que en una situación de crisis encuentran como una opción la compra de bonos especulativos; es decir, con un nivel de riesgo.

Más allá de haber logrado una mejor tasa que otros países que emitieron bonos en la región, la tasa de estos

bonos soberanos (4,875%) es mayor a la tasa promedio de los créditos externos contratados por Bolivia el año 2011, tasa que llegó a 2,13%.

Endeudamiento responsable

Además del destino de los recursos, la responsabilidad en el endeudamiento involucra buscar créditos favorables en términos del costo que implicará el pago de esa deuda. El artículo 322 de la Constitución menciona que la estrategia de financiamiento del país con nuevos créditos o emisiones de deuda debiera optar por las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

Tras la reciente colocación de bonos se ha conocido que se invertirá en infraestructura e industrialización de energía y minerales, posteriormente se especificó también el financiamiento de carreteras y proyectos productivos; sin embargo, debería mostrarse claramente el destino que tendrán estos recursos, que además involucrará un pago de intereses.

En algunos países vecinos se realizaron auditorías integrales a la deuda pública y, en el contexto de la crisis en Europa, la sociedad civil está pidiendo investigar la deuda, proceso que probablemente no sea una prioridad para las autoridades de Bolivia en este momento, considerando que gran parte de la deuda anterior fue condonada, pero ante el nuevo endeudamiento sería importante dar inicio a un control social de la deuda pública del país, dando a estos procesos mayor transparencia y participación social, no

Indicadores de endeudamiento (en %)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Saldo deuda externa nominal / PIB	55.1	55.6	63.5	57.4	51.6	28.2	16.7	14.6	14.9	14.6	14.5
Saldo deuda interna TGN / PIB	16.7	17.7	19.7	21.2	21.8	20.4	19.1	16.5	17.4	16.9	13.6
Saldo deuda interna BCB / PIB	1.8	1	1	1	1.3	2.8	8.7	14.8	10.1	7	7.3
Saldo deuda interna TGN / Ingresos fiscales	66.6	70.8	80.9	79.8	71.2	56.7	55.7	42.6	45.6	46.3	36.6
Servicio deuda externa / exportaciones	16.3	16.6	13.9	11.3	11.2	7.5	6.6	3.7	4.1	4.2	2.5
Servicio deuda externa / PIB	3	3.3	3.4	3.3	3.8	2.8	2.5	1.5	1.3	1.5	1.0

sólo en las negociaciones y condiciones del financiamiento, sino también en el uso e impacto de los recursos.

Este proceso, por la composición de la deuda del país, no solamente se debe enfocar en la deuda externa, sino en la deuda pública total, lo que incluye a la deuda interna del sector público con el sector privado, que también se ha ido incrementando, alcanzando casi a 4.900 millones de dólares al 1° de noviembre de 2012, sumando entonces una deuda pública total (externa e interna) de 8.835 millones de dólares. La deuda total, en términos del PIB, fue equivalente a 35,4% el 2011.

En cuanto a los indicadores de deuda externa, están por debajo de los límites de sostenibilidad generalmente utilizados en el ámbito internacional; sin embargo, no existen indicadores internacionalmente acordados o indicadores propios de país para la deuda interna y, por tanto, no se tiene un parámetro que permita valorar estos niveles. Por ahora, de acuerdo con estos indicadores, mientras el PIB y las exportaciones sigan creciendo, la deuda externa seguirá siendo sostenible, y dados los precios de materias primas y los volúmenes de venta, esta tendencia se está manteniendo.

Apreciaciones

- Es contradictorio el superávit fiscal de los últimos años, registrado principalmente por los ingresos del sector extractivo, reflejado en los altos saldos en las cuentas bancarias del sector público, y el continuo nuevo endeudamiento para financiar las necesidades de inversión en el país. Esto denota la necesidad de una redistribución de recursos y la realización de un pacto fiscal con un enfoque de concertación entre Estado y sociedad civil.
- La recuperación de la confianza de la inversión extranjera en el país pasa también por contar con una Ley de Inversiones.

- En términos de calidad de la información económica y fiscal, la emisión de bonos es un factor que debe generar la mejora en la información actual y en la que será publicada de manera oportuna, confiable y precisa para seguimiento de las agencias calificadoras y tenedores de estos bonos.
- En un marco de manejo responsable de la deuda, es importante que la población sea informada con claridad sobre el destino específico de estos recursos y se genere el espacio para un control social a la deuda pública. Más aún ante la posibilidad de una nueva emisión de bonos el año 2013 por una cifra similar.
- Esta emisión, que finalmente es una deuda y tiene un costo, debe generar la expectativa de la población por el impacto de estos bonos en cuanto a su destino y uso, y por otro lado, en cuanto a la inversión que logre atraer, esperando que contribuya a la generación de valor agregado y empleo.
- Se puede aprovechar esta nueva fuente de deuda externa para que sea el inicio de una evaluación del impacto del endeudamiento del país, no sólo económico, sino social, ambiental, y otros.
- Finalmente, es preciso reflexionar sobre la decisión del país de participar en mercados internacionales en un sistema financiero globalizado con políticas neoliberales y en función al capital, que ha mostrado no ser el camino ideal tras la crisis económica y financiera; cuando, al mismo tiempo, el mismo país promueve, junto a países aliados de la región, una nueva arquitectura financiera internacional que esté fuera de la especulación de estos mercados y que promueva un sistema más justo.



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS NUEVAS ÁREAS DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS?

Una herramienta en la página web de Fundación Jubileo permite conocer las áreas de hidrocarburos, si éstas se superponen a áreas protegidas, qué dicen los contratos sobre exploración y explotación hidrocarburífera, entre otra información relevante, disponible en www.jubileobolivia.org.bo

El Sistema de Información Geográfica en Hidrocarburos (SIGH) permite, mediante mapas interactivos, conocer:

- ▶ La ubicación de las 98 nuevas áreas para exploración y explotación de hidrocarburos reservadas para YPFB.
- ▶ La ubicación de las áreas en actual explotación de hidrocarburos, así como el contenido de los contratos petroleros para cada una de ellas.
- ▶ La ubicación de los Parques Nacionales protegidos y áreas de manejo integrado
- ▶ La ubicación de las Tierras Comunitarias de Origen.

Adicionalmente, el SIGH permite superponer los mapas descritos anteriormente a fin de detectar eventuales afectaciones que pudiera ocasionar la actividad hidrocarburífera a las áreas naturales protegidas.

Las coordenadas de las distintas áreas fueron extraídas del Anexo A de los 43 Contratos de Operación suscritos en octubre del 2006, así como en el Anexo al Decreto Supremo N° 1203, de abril de 2012 en el que se encuentran las 98 áreas reservadas para la exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB.

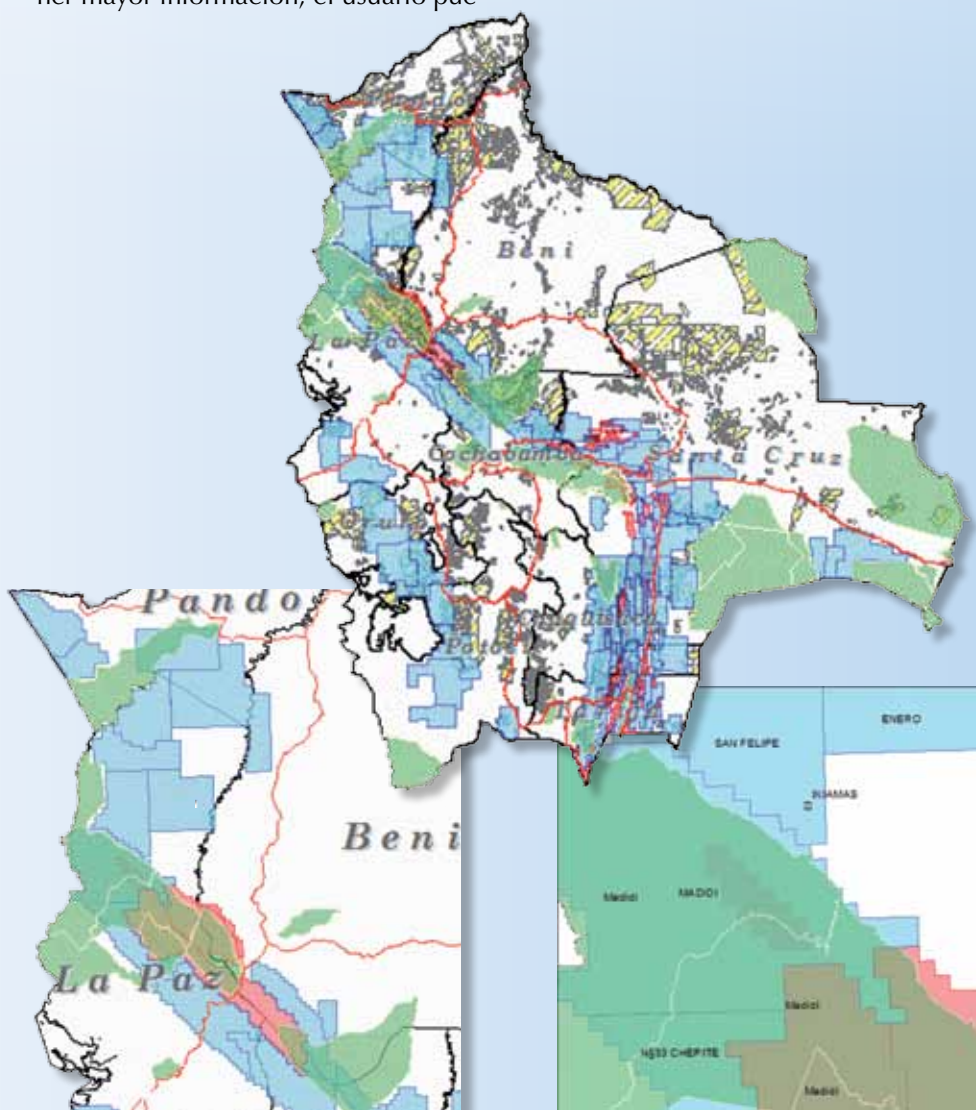
Como ejemplo, si el usuario del SIGH desea ver con más detalle la situación del Departamento de La Paz, se puede hacer un acercamiento al mapa, a fin de examinar la imagen más de cerca.

En el cuadro a la derecha se puede observar que las nuevas áreas reservadas para exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB están pintadas de celeste; a su vez, los Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integrado están pintados con color verde. Al parecer, existiría superposición de áreas en la zona del Madidi. Para obtener mayor información, el usuario pue-

de nuevamente acercar la imagen a fin de conocer cuáles son las zonas que se está investigando y tener más detalles.

Como se observa en el ejemplo, existe superposición del área de exploración y explotación de hidrocarburos "Madidi" con el Parque Nacional Madidi.

El propósito de este tipo de análisis es prevenir posibles situaciones de conflictividad, y que el gobierno proceda a tiempo a ajustar los límites de las áreas de exploración, a fin de evitar la posible afectación.



FUNDACIÓN JUBILEO NACIÓ HACE 9 AÑOS PARA IMPULSAR POLÍTICAS PARA UNA VIDA DIGNA

Cuando en 1994 el Papa Juan Pablo II convocó al “Año Jubilar 2000”, nadie en Bolivia pensaba en una Fundación Jubileo. En noviembre de 1996, los obispos de Bolivia retomaron el llamado del Papa y trazaron la línea para una campaña que iba a remover todo el país y que hasta hoy marca el trabajo de esta Fundación:

Este impulso fue asumido por la hermandad entre la Iglesia boliviana y las diócesis alemanas de Hildesheim y Tréveris.

A partir de pequeñas iniciativas de base, se gestionó la campaña por la condonación de la deuda externa, recolectando 400.000 firmas en toda Bolivia. Este esfuerzo tuvo como resultado no solamente el alivio de deuda para los países pobres altamente endeudados en 2001 (conocido como Iniciativa HIPC II, por sus siglas en inglés), recursos que genera el Estado boliviano y que, en vez

de pagar a los acreedores externos, hoy llegan a todos los municipios del país; pero también se generó una creciente conciencia respecto al costo social de la deuda externa.

El Foro Jubileo 2000, organizado por la Iglesia Católica, convocó en todo el país a 10 foros departamentales y uno nacional, con un total de 10.000 participantes. Fue un hito en la participación de la sociedad civil para recoger propuestas sobre el uso de los fondos liberados por la condonación, pero también sirvió de base para la elaboración de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).

Diferentes actividades de análisis de la coyuntura económica y social, y de incidencia, se desprendieron de este compromiso de la Iglesia boliviana: Un trabajo intenso permitió definir el rol y alcance del control social, lo que quedó establecido en el Título IV de la Ley del Diálogo 2000. Posteriormente, este derecho ciudadano fue reconocido en la Constitución Política del Estado Plurinacional (Art. 241 y 242).

Jubileo también realizó un intercambio permanente con redes internacionales sobre deuda, y con las diócesis hermanas en Alemania que, desde un

principio, fueron parte del esfuerzo por una mayor información y transparencia en los temas económicos y sociales de la sociedad boliviana.

En 2003, los principales gestores de la Campaña Jubileo en Bolivia –la Conferencia Episcopal Boliviana y las Diócesis de Hildesheim y Tréveris– decidieron continuar el trabajo de incidencia política, demandando atención a los sectores más empobrecidos.

De ahí surgió la necesidad de darle un marco institucional más estable y especializado. Si bien empezamos con el tema de deuda externa, en estos 9 años de vida institucional, hemos ampliado nuestras acciones de investigación, capacitación e información hacia la sociedad civil en ámbitos temáticos tan importantes como: presupuestos públicos, financiamiento para el desarrollo, situación de los hidrocarburos, desarrollo humano integral, participación y control social, todos con un enfoque desde la ética social cristiana.

Así hemos brindado un servicio a organizaciones sociales, instituciones, redes y plataformas con el propósito de coadyuvar al análisis, debate público e incidencia política en temas de interés en la vida del país.

“Este es el Jubileo, tiempo de gracia, de conversión, de reconciliación, perdón, de justicia, de amor, de solidaridad, de paz y de restituir lo robado a los pobres, como signo de justicia; de verdaderos esfuerzos por abolir la deuda externa, que mantiene en pobreza, dependencia y postergación a nuestro países y a todos los pueblos del tercer mundo; de respetar la tierra, defender el medio ambiente, proteger y desarrollar la vida; y colocar toda la creación, la historia y las relaciones humanas en la perspectiva del Proyecto de Dios. Es el tiempo de comunicar vida y esperanza a todos”.



OBRAS DEL P. GREGORIO IRIARTE EN FUNDACIÓN JUBILEO



El Padre Gregorio Iriarte ha dejado como legado una biblioteca para la vida, escrita desde su fe y compromiso junto al pueblo.

De su obra se destaca su ideal y vocación para la formación en valores, su espíritu motivador para vivir en positivo, su llamado para que la política se impregne de la ética, su inquietud para que los padres y maestros sean formadores de jóvenes, su empeño para impulsar una lectura crítica de la realidad que tenga como consecuencia

que cada ser humano sea tratado como hijo de Dios.

El padre Gregorio fue sacerdote, amigo, educador y luchador social. Incansable, sensible y comprometido con la vida, la justicia y la dignidad. Varios de sus textos están disponibles en librerías y centros de formación, y también en Fundación Jubileo, institución que, por encargo suyo, reeditará, la versión 18 de "Análisis Crítico de la Realidad", obra que fue iniciada con su asesoramiento.

INSTITUCIONES DE LA PAZ HACEN UN PACTO PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Instituciones públicas, privadas y organizaciones productivas del departamento de La Paz impulsan el "Foro La Paz avanza hacia el desarrollo".

El Foro es un escenario de articulación y concertación permanente con el propósito de contribuir a una visión de desarrollo de la región, que se exprese en generación de empleo y reducción de la pobreza.

El Departamento de La Paz aporta al PIB nacional con 25% del producto; sin embargo, ocupa el sexto lugar en ingreso per cápita (por persona).

Esta iniciativa de concertación empezó con el impulso de 10 instituciones y organizaciones, entre ellas la

Gobernación de La Paz, los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Fundación Jubileo, UMSA, PNUD, AMDEPAZ, CIOEC y AOPEB, a la que se suman otros actores locales y regionales.

El segundo Foro, realizado el 28 de noviembre, acordó promover y apoyar el desarrollo económico local y territorial del departamento; facilitar el diálogo, la cooperación y organización empresarial; implementar complejos productivos, entre ellos el complejo industrial y tecnológico del área metropolitana; promover la atracción de inversiones y negocios; e institucionalizar el "Foro La Paz Avanza".



PARLAMENTARIOS EN DEBATE SOBRE HIDROCARBUROS

Senadores convocados por la Comisión de Economía Plural y diputados invitados por el Comité de Energía e Hidrocarburos debatieron en un seminario sobre Monitoreo y Vigilancia del Sector de Hidrocarburos, con base en las exposiciones de Fundación Jubileo y de Revenue Watch Institute.

Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez V.

Coordinador General

Waldo Gómez R.

Responsable de edición:

Jorge Jiménez Jemio

fundajub@entelnet.bo

www.jubileobolivia.org.bo

Dirección: Edif. Esperanza,
Av. Mcal. Santa Cruz, Piso 2

Casilla 5870 La Paz, Bolivia

Tel: (591-2) 2125177 – 2311074

Equipo técnico:

René Martínez

Patricia Miranda

Jaime Pérez

Herbert Irahola

Raúl Velásquez

Irene Tokarski

Wilson Gisbert

María del Carmen Inch

Bernarda Sarue

2012

Administración:

Mirian Clavijo

María Apaza

Olga Machicado

Distribución:

Amparo Mallea

Raquel Ortuño

Pamela Pizarro

Publicación con apoyo de

KZE-Misereor Alemania,

Oxfam GB

D.L. 4-3-61-12

